



## **MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MAMPARAS DE SEPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS COMO MEDIDA DE DISTANCIAMIENTO CONTRA EL COVID-19 MEDIANTE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA**

Ante la situación acaecida por del coronavirus SARS-CoV-2, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005), en su reunión de 30 de enero de 2020, declaró el brote de este nuevo coronavirus como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), pasando a denominarse por parte de la OMS la nueva enfermedad como COVID-19 (enfermedad infecciosa por coronavirus - 19).

Tras su aparición inicial en China y a pesar de los esfuerzos, pronto aparecieron múltiples réplicas en otros países, también con una rápida propagación, lo que obligó a que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la situación de pandemia internacional con el ánimo de paliar su rápida expansión, tanto a nivel nacional como internacional.

En España, la aparición de casos y su escalada llevó al Sistema Sanitario al borde del colapso, por lo que hubo que adoptar medidas urgentes y sin precedentes recientes, con el objetivo de amortiguar el impacto del virus y sus imprevisibles consecuencias tanto sanitarias, como económicas y sociales.

Teniendo en cuenta que este nuevo virus tiene una gran capacidad de expansión entre la población, con un índice de propagación  $R_0$  de entre 1,4 y 3,5, según los casos, y para el que actualmente no se dispone de vacuna ni tratamiento médico específico, la prevención junto con las medidas de higiene y distanciamiento social, se están convirtiendo en una de las más eficaces medidas de lucha contra la enfermedad.

Como principal vía de contagio, se ha detectado la vía aérea, con una alta capacidad de permanecer en superficies y objetos que, al contacto con ellas, se convierte también vía de contagio. Además, la capacidad de contagio del virus se da con carácter previo a la aparición de síntomas en el transmisor y, aunque afecta a todos los segmentos de población, es especialmente letal en personas con patologías previas o de avanzada edad, siendo los niños portadores, en muchas ocasiones asintomáticos.

En el ámbito educativo, ante la detección de los primeros casos en España, la Comunidad de Madrid comienza adoptando medidas en los centros docentes mediante la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

En el artículo primero de esta Orden 338/2020, de 9 de marzo, se establece en el ámbito docente *“La suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”*, recomendado continuar las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y on-line.

Ante el progresivo avance de contagios, que se extiende a toda España y amenaza con colapsar el sistema sanitario nacional, se aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis





sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este Real decreto, entre otras medidas, suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, manteniendo las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y "online", siempre que resulte posible.

Ante la persistencia de la pandemia, el estado de alarma se ha visto prorrogado en sucesivas ocasiones hasta las 0.00 horas del día 21 de junio de 2020, según dispone el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

Una vez finalizado el estado de alarma, y ante la necesidad de retomar la actividad en presencia del virus que puede dar lugar rápidamente a nuevos brotes, se publica el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En el ámbito educativo, el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, establece que *"Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan."*

*"En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio"*

Con el inicio del periodo estival y la vuelta a la nueva normalidad tras el estado de alarma se han detectado un considerable repunte del número de contagios y focos con especial incidencia en determinadas regiones, lo que hace preocupante la situación ante el comienzo del curso escolar 2020/21 que se inicia de forma escalonada a partir del día 4 de septiembre. Por lo que es necesario la adopción de prevención en las aulas que garanticen la vuelta al colegio de forma segura.

En la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 de 9 de julio, se señala *que Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se deben centrar en la limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal de 1,5 metros, la higiene de manos y respiratoria, la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro, así como una gestión adecuada y ágil ante la aparición de un caso, siendo fundamental la aplicación de las distancias de seguridad entre alumnos que reduzcan las ratios de ocupación de las aulas para evitar la transmisión por vía aérea del virus.*

No obstante, la disponibilidad de espacios en los centros viene determinada por las edificaciones disponibles en los centros y aunque mediante otras actuaciones hace está logrando ampliar espacios para la expansión de las aulas, no es suficiente, por lo que es necesario acudir a otros instrumentos de separación que eviten la transmisión vía aérea del virus al no poder lograrse la separación del 1,5 m en todos los casos.





Entre las medidas alternativas, se encuentran las mamparas de separación que aislen de forma individual a aquellos alumnos que no puedan guardar la separación de seguridad.

Estas mamparas deberán atender tanto la necesidad de separación en las aulas como en otros espacios compartidos como los comedores, proporcionar según el caso la visibilidad adecuada para la docencia. Esta necesidad se convierte en especialmente urgente al haberse iniciado ya las clases.

Dentro del marco normativo español, la contratación pública para casos de excepcionalidad está perfectamente reglada en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). Así, el citado artículo 120 establece que:

*"1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:*

*a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.*

*(. . .)*

*c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.(...)"*

En el caso planteado del COVID-19, con efectos que lejos de remitir parecen rebrotar en múltiples puntos, se requieren actuaciones contundentes que eviten una situación como la vivida en los meses precedentes que dieron lugar a la declaración del estado de alarma y que se hacen especialmente urgentes por el grave peligro de contagio que implica el inicio del curso escolar sin las medidas de prevención adecuadas. La situación resulta especialmente grave y peligrosa, no solo por la naturaleza de la población afectada, sino también por su distribución territorial, lo que justifica la contratación de los medios necesarios bajo un régimen excepcional. La asociación de los efectos del COVID-19 y la necesidad de hacer uso de medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas para combatirlo ya quedó puesta de manifiesto en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 que establecía que *"La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento*





*jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” lo que conducía a la asociación de grave peligro y existencia del COVID-19 en la sociedad de forma inequívoca al establecer “todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia”*

Así, la contratación con empresa especializada el suministro de pantallas protectoras (para comedor y aula), como medida alternativa para aquellos casos en los que no sea posible conseguir la separación de 1,5 m se encontraría justificada por su carácter de urgencia y su necesidad para evitar un riesgo grave para la salud según lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP y en consecuencia susceptibles de su contratación sujeto a al carácter de tramitación de emergencia.

Se estima que es necesario servir 6.021 mamparas de separación en comedores y 2.166 para aulas que se entregarían directamente en los centros y con carácter inmediato, estimándose su coste en 380.000 €

En consecuencia, la contratación del suministro de mamparas en centros educativos como medida de distanciamiento contra el COVID- 19 es una necesidad sobrevenida y totalmente justificada que deriva las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia y ha de ser atendida con toda celeridad y urgencia, no siendo factible otra forma de contratación distinta a la tramitación de emergencia de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP y artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo.

Madrid, 14 de septiembre de 2020

EL DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCUTRAS Y SERVICIOS

Fdo.: Ignacio García Rodríguez

